

# 1917

*Número 3, año 1, 23/8/2020*



## **EXPROPIAR LOS MANANTIALES DE AGUA**

La escasez de agua se ha transformado en una de las principales cuestiones políticas del siglo XXI. El periodismo especializado remarca que detrás del golpe de Estado en Bolivia lo que realmente subyace no es el interés por el litio sino por los valles y manantiales de agua potable. Una sequía generalizada en la ciudad de La Paz había gestado movilizaciones de masas contra Evo Morales en el 2016 en las cuales se denunciaba que los reservorios de agua eran utilizados por los sistemas industriales de riego de los grandes productores. Hoy, Añez no defiende que los manantiales sean expropiados para el pueblo sino, al contrario, la profundización de la propiedad privada de los valles por los grandes terratenientes.

Los ríos de Chile han sido literalmente subastados al mejor postor por el régimen pinochetista que hoy representa Piñera. Mientras tanto, Valparaíso ha sido declarada como ciudad en riesgo por los recurrentes incendios que genera la sequía. Los bidones embotellados por empresas privadas cotizan a precio dólar. Al Este de la cordillera el gobierno de Mendoza pretende habilitar la minería a cielo abierto que pone en riesgo los manantiales naturales de H<sub>2</sub>O. En ambos casos, la lucha en defensa del agua ha gestado puebladas y revoluciones pues las masas lo comprenden como lo que es, una cuestión crucial para la supervivencia.

En Argentina se calcula que el veinte por ciento de la población carece de acceso al agua dulce mientras que otro veinte consume agua perjudicada por algún mineral tóxico. Los manantiales estatizados por las provincias son servidos en bandeja a las mineras y mega empresas como Coca Cola que no se pueden apropiarse de ellos por ley pero sí están habilitadas para su extracción con fines industriales. Por su parte, los acueductos sufren un deterioro de décadas que deja a ciudades enteras sin agua.

En pandemia, esta situación se vuelve un crimen contra el pueblo. En la semana que corre, en la localidad bonaerense de Berazategui, se ha paralizado el suministro durante cuarenta y ocho horas haciendo que en la misma cantidad de tiempo las muertes por coronavirus se dupliquen. Allí se supone que el agua es propiedad del Estado municipal.

Privada como en Chile o administrada por el estado capitalista, la propiedad privada del agua se ha convertido en una cuestión existencial que plantea la transformación radical de la sociedad. Un gobierno de trabajadores expropiaría los manantiales de agua dulce y planificaría su utilización para que el consumo de agua no sea un negocio sino un derecho humano elemental.

**290 000 000 000**

*DOSCIENTOS NOVENTA MIL MILLONES*

The Coca-Cola logo, featuring the brand name in its signature script font.

Es la cantidad de agua que Coca Cola utilizó en el año 2016 para fabricar sus productos.

Por su cantidad de azúcar, cada litro de Coca Cola requiere 200 litros de agua.

## TROTTA SE TIENE QUE IR

La [renuncia de Adriana Puiggrós](#) ha puesto sobre la mesa lo que para muchos ya era evidente: el Ministerio de Educación no ha hecho nada en los últimos cinco meses para que millones de chicos continúen el proceso educativo de forma virtual.

Hoy Trotta es, junto a Rodríguez Larreta, el abanderado de la vuelta con protocolos, aunque sus planes hacen agua. El ministro ha avalado el retorno en Jujuy, que hoy tiene que convocar docentes para atender casos de coronavirus, y luego en San Juan, que acaba de cerrar nuevamente los establecimientos de cuatro de los diez distritos en los que los estudiantes habían retornado a las aulas. El resto de las nueve provincias que hace un mes planificaban la vuelta pos-receso han cancelado dichos planes. En la Provincia de Buenos Aires el ministerio no se ha animado ni a plantear el problema y todo indica que no abrirá la boca a riesgo de poner en la agenda la brutal situación en que ha quedado la educación pública. Cientos de miles de niños serán analfabetos si no se garantizan computadoras, internet y condiciones laborales adecuadas para dar clases virtuales.

Los planes de reapertura de las aulas son la consecuencia natural del levantamiento de la cuarentena impulsado por el tridente Fernández-Larreta-Kicillof: para que los padres trabajen los chicos tienen que ir a la escuela. Por su parte, se someten a las exigencias de escuelas y universidades privadas por volver ya mismo a clases. A nivel general, Trotta se coloca del lado de

la inmunidad en rebaño que ya fracasó en Brasil y Estados Unidos.

La ausencia de una política que facilite la virtualización ha generado un negociado inmenso para las multinacionales de software, comenzando por *Google*, con *Google Classroom* y *Meet*, sus plataformas de aulas virtuales y videoconferencias, pero también de *Zoom*, *Microsoft* (la UBA acaba de firmar un convenio con la empresa de Bill Gates), *Edmodo* y *Moodle*, *Youtube*, entre otras. El anuncio de que los sitios *.edu* no consumirían datos ha sido una gran estafa pues apenas unos pocos sitios como *educ.ar* y las pocas plataformas que lanzaron las provincias están incluidas. Ninguno de estos sitios permite la interacción sincrónica (clases por videoconferencia) entre docentes y estudiantes. Ni siquiera tienen la capacidad para albergar videos.

Si a los estudiantes se les ha negado el reparto de dispositivos, incluso las 147 mil netbooks encontradas en un depósito del correo, a los docentes se les ofreció endeudarse para su compra: un subsidio directo a los bancos y las empresas de informática, que igualmente no llegó a nadie pues los 25 mil cupos se agotaron en minutos. Mientras tanto la paritaria nacional, con anuencia de CTERA quedó congelada y las paritarias provinciales fueron incumplidas.

A decir verdad, no podía esperarse otra cosa de Trotta. Abogado de familia militar salta al ministerio luego de haber sido rector de una

universidad privada “sindical”, la UMET, del SUTERH de Santamaría, que a través de distintos convenios vende posgrados, entre otros, a los docentes. Trotta llegó al poder gracias a sus acuerdos con la burocracia sindical y el mercado de la privatización educativa impulsado por el Banco mundial y el Banco Santander que copó la UBA. Las universidades y colegios privados del país que hoy amenazan con despidos en masa si no se reabren las escuelas han sido subsidiadas millonariamente en los meses de pandemia.

Si queremos que los miles de estudiantes que han quedado por fuera del proceso de continuidad

pedagógica vuelvan a la escuela, el camino no es la reapertura prematura impulsada por los mismos que les negaron los medios para seguir estudiando, sino garantizar las herramientas tecnológicas y la conexión a internet para que puedan participar del proceso educativo.

En términos sociales el Ministerio de Educación tampoco ha movido un pelo para que los recursos escolares y universitarios se pongan a disposición de erradicar la pandemia. El Ministerio se ha transformado en un enemigo de los trabajadores de la salud agobiados en hospitales sin recursos.

Trotta se tiene que ir.

## CRISIS

En una reciente entrevista, Miguel Acevedo, presidente de la *Unión Industrial Argentina*, afirmó que a pesar de la reapertura general de la industria que ya casi llega al cien por ciento en todas las provincias, los números siguen sin crecer. “Ahora producimos - dice - pero no hay clientes a quienes venderle”.

Que la crisis económica es previa al coronavirus lo demuestra, también, la actual situación de las empresas de Software que festejaron incansablemente la virtualización general del trabajo pero ahora manifiestan haber alcanzado un techo en sus proyecciones. “El potencial de crecimiento es enorme, pero nos encontramos con que miles de personas carecen de computadoras o poseen modelos que no se adaptan a la nueva situación”, cuenta el gerente de *Google* en Argentina.

Si *Wall Street* aún no se ha desmoronado es por la inyección infinita de capital aportado por los estados para salvar a las empresas en crisis. Sin embargo, el capital ficticio es incapaz de reemplazar la producción de riqueza cuya esencia es la explotación del proletariado.

Los capitalista levantan las cuarentenas pero lo único que logran es profundizar la catástrofe con sistemas de salud colapsados.

El capital ha lanzado a las calles y fábricas a los obreros a contagiarse y aun así no puede resolver sus contradicciones. La bancarrota anuncia guerras y revoluciones aún más agudas de las que ya se suceden.

# HACINAMIENTO, PANDEMIA Y PROPIEDAD

Escribe **Cata Flexer**

El 24,6% vive la población vive hacinada. 16,7% no tiene un baño adecuado. Sólo el 50,1% de la población accede al agua corriente, cloacas o a la red de gas: el 11,2% no tiene agua potable y el 33,7 no tiene cloacas. El 8,1% vive cerca de basurales y el 11,6% en zonas inundables.

Sólo el 63,3% de los hogares es propietario de una vivienda (esto sin contar que muchas viviendas se han convertido en hogares multigeneracionales). 19,2% alquila y el 8,8% de las familias vive en terrenos ocupados.

Son datos de la Encuesta Permanente de Hogares sobre los principales conglomerados urbanos, es decir, no tiene en cuenta las ciudades más pequeñas y la población rural, del segundo semestre de 2019.

Lo que los medios han tratado de colocar como una interna entre distintos sectores afines al gobierno (Movimiento Evita, CTEP, La Cámpora) y producto de la pandemia, es la realidad de millones de trabajadores que no puede acceder a la vivienda, desde mucho antes de que la emergencia sanitaria ponga una nueva alarma sobre el problema.

Un reciente estudio de la UADE muestra que para comprar un departamento de 30m<sup>2</sup> en Capital se necesitan 160 salarios de \$57.000 (*Ámbito*, 23/06), aunque el promedio de los asalariados gana muchísimo menos: el 85% de las personas de entre 24 y 39 años gana menos de \$28.000 (*Clarín*, 23/08). Si la cuenta la hicieramos con el salario mínimo, se necesitarían 568 sueldos para llegar a adquirir los 30m<sup>2</sup>, en los que a una familia “tipo” no le queda más que vivir hacinada.

El crédito hipotecario tampoco es una opción. Para comprar ese mismo departamento de 30m<sup>2</sup>, a 30 años, se debería poder pagar una cuota de \$60.000 y tener ingresos por \$260.000. A esto se agrega la estafa de las UVA, ya que los créditos hipotecarios no se otorgan por un monto de dinero sino de “Unidades de Valor Adquisitivo” que se actualizan con la inflación. Quiénes pidieron estos créditos en los últimos años hoy están organizándose para que el Banco Central de de baja este robo, que implica que luego de varios años de pagos, cuyas cuotas se duplicaron o triplicaron, hoy deben más que lo que pidieron.

Los planes de vivienda del Estado son inexistentes. Para hacernos una idea, el promocionado plan Procrear anunciado por Alberto Fernandez implica la construcción de 50.000 viviendas, cuando el déficit habitacional del país está calculado en 3.500.000 hogares. En un reciente informe de CIPPEC, los directores de los Institutos de la Vivienda provinciales confesaban que uno de los principales problemas que tienen es que no pueden comprar lotes donde construir por el alto precio de la propiedad urbana y periurbana.

El acceso a la vivienda propia está, entonces vedado a una gran masa de trabajadores.

En la Capital, sólo el 53,6% de los hogares es propietario de su vivienda. El resto son inquilinos y habitantes de las villas porteñas. El costo de un alquiler en la Ciudad ronda los 20.000 para dos ambientes, por lo que implica el gasto más grande de una familia. Los alquileres en las villas no son mucho más baratos, pero sortean uno de los principales problemas de los trabajadores a la hora de alquilar: no requieren garantía, un requisito

muchas veces excluyente en los alquileres formales.

¿Por qué el costo de la vivienda es tan alto? La especulación en torno al suelo urbano y en especial a los inmuebles ha sido históricamente el resguardo de valor frente a los más volátiles bonos y demás herramientas financieras. Por el mismo motivo, muchísimos edificios de departamentos construidos con fines especulativos se encuentran deshabitados y los dueños (grandes grupos financieros) no los ponen a la venta o en alquiler justamente para elevar el precio de los que sí ofrecen, reduciendo la oferta total frente a una demanda creciente.

El aumento de los precios de la vivienda y el suelo urbano lleva entonces a una concentración cada vez más grande de la propiedad, a la que cada vez menos trabajadores pueden acceder. El mercado inmobiliario se transforma en el negocio especulativo de las grandes inmobiliarias que utilizan sus ganancias millonarias para especular en la bolsa.

El hacinamiento consecuente ha salido nuevamente a la luz durante la pandemia, cuando entre las medidas de prevención más eficaces se encuentran el distanciamiento y la higiene.

Ante la presión creciente por la ocupación de tierras ociosas, producto de todo lo antedicho, se han generado en el gobierno dos orientaciones. Una punitivista, en resguardo de la propiedad privada, y otra que defiende las ocupaciones. Esta última, en la que abrevan el Movimiento Evita de Pérsico y la CTEP de Grabois representan una impostura. Los mismos que estarían en condiciones, como administradores del Estado, de otorgar lotes de tierra, proveer servicios y realizar construcciones masivas de viviendas, lanzan a los trabajadores más empobrecidos a solucionar la crisis habitacional ocupando terrenos no saneados, sin agua corriente, sin cloacas, sin gas y sin luz.

La urbanización y el derecho a la vivienda deben ser políticas de estado. Apoyamos incondicionalmente la toma de terrenos en la perspectiva de una planificación urbana acorde a las necesidades de los trabajadores. Un plan de viviendas es incompatible con especulación inmobiliaria avalada por el Estado pero sí compatible con los intereses de un gobierno obrero. La toma de tierras es la expresión de un régimen en crisis terminal.



# LA SALUD DE MENDOZA EN ESTADO CRÍTICO

**Escribe** Martín Ortíz

## **Preludio de lo que vendría**

Sin lugar a dudas la pandemia desnudó y terminó de visibilizar el pésimo estado de todo el sistema sanitario de la provincia. Trabajadores y trabajadoras de la salud cobrando muy por debajo del valor de la canasta básica de alimentos, falta de materiales e insumos básicos para trabajar, de medicamentos para pacientes y una muy pobre infraestructura edilicia y de equipamiento en general. En otras palabras una gran desinversión en salud.

Allá por marzo del corriente año, cuando se decretaban la cuarentena y el aislamiento social obligatorio ya solicitábamos más equipamiento y materiales de bioseguridad para los nosocomios públicos; esto a fin de prevenir lo que finalmente vendría: contagios masivos dentro del personal de salud y el cuasi colapso del sistema sanitario hoy en día.

Pero el gobierno de Suárez y compañía tienen y tuvieron otras prioridades, por ejemplo, el pago de la descomunal deuda que tomó su antecesor Cornejo. Esto en desmedro de fortalecer un bien vital para el pueblo trabajador como es el sistema sanitario en su totalidad.

Entonces comenzaron los contagios masivos en los hospitales públicos; en primer lugar, en el Hospital Lagomaggiore. Porque muchos de los compañeros que trabajan ahí deben hacerlo en otro centro sanitario a la vez por los pobres salarios que perciben; sumado al escaso material de bioseguridad con el que contaban, más el hecho de que prestan largas horas de jornada laboral y

comparten para su desayuno o almuerzo o cena un espacio común de 2mts x 3mts cuadrados y con el agravante de que hasta el día de hoy jamás se les realizaron testeos a todo el personal. Todo eso comulgó para que en cuestión de días se multiplicaran los casos de contagio entre el personal de salud de Mendoza.

Mientras tanto, más de 2.000 (dos mil) trabajadores de la salud seguían trabajando en forma precarizada(en negro), pidiendo el pase a planta permanente. El gobierno respondía con una irrisoria propuesta de pase a planta gradual a partir del 2021 y en función de méritos.

Nota aparte: hoy muchos de los contagiados son esos compañeros precarizados que paradójicamente no cuentan con una obra social, y que en algunos casos (como pudimos atestiguar) están llevando adelante la enfermedad y recuperación en sus hogares.

Además, como corolario del desprecio al personal de salud en general, el aguinaldo que debieron cobrar en junio recién lo percibirán a partir de septiembre y en forma escalonada. Las paritarias siguen cerradas y desde hace un año perciben el mismo sueldo pese a la inflación. La burocracia sindical sólo oculta todo y hace lo imposible por desmovilizar.

## **Nada es lo que parece**

Desde el minuto uno de la cuarentena, la ministra Ana María Nadal y el gobernador Rodolfo Suárez hicieron hincapié en que la cuarentena sería lo más perjudicial para la economía mendocina, y que la pandemia acá estaba controlada (sic.). Y siempre fueron fieles a su discurso; desde que comenzaron

los contagios y se contaban por unidades, hasta hoy que se producen en promedio 250 diarios. De hecho, la ministra sigue minimizando la enfermedad y ocultando lo inocultable pues dijo hace un par de días atrás que los contagiados leves o asintomáticos podrían llevar adelante la internación en sus hogares.

Pero lo que subyace detrás de esto es que la provincia sólo cuenta con algo más de 250 camas de unidad de terapia intensiva y algo más de 3.000 unidades de sala común en su totalidad, entre el sector público y privado.

Por eso los números no dan: cuestión de lógica pura. Por eso el sistema sanitario de Mendoza está al borde del colapso.

Pero de eso no se habla como tampoco lo hacen los medios serviles de comunicación, mercenarios del poder de turno que se llevan fortunas en concepto de pautas publicitarias donde venden constantemente la gestión gubernamental y a la provincia; cual si estuviéramos en un paraíso.

Por eso acallan las voces de más de 60.000 personas afectadas en el departamento de Guaymallén, el más poblado de la provincia, donde por falta de insumos y personal se cerraron 8 (ocho) centros de salud para atender distintas patologías de los sectores más vulnerables.

### **Buscar una salida**

Ante tanto atropello gubernamental; ante tanto inmovilismo sindical y con el ánimo desmoralizado de much@s trabajadores, lo que nos debemos plantear es una salida ante este presente oscuro, y ante lo que en el futuro será una post-pandemia. Organizar y planificar luchas para combatir este régimen anti-obrero y con perspectivas de tomar poder desde las bases, en todos nuestros puntos laborales, con el fin de llegar al poder en toda su magnitud.

# HUELGA GENERAL EN BIELORRUSIA

## Un gobierno que cae

Los acontecimientos políticos en Bielorrusia han ganado por fin la primera plana de la información internacional. El domingo se reunieron alrededor de 150 mil personas en la plaza principal de Minsk, la capital, para reclamar la caída del presidente Lukashenko y la convocatoria a nuevas elecciones bajo el control de una nueva comisión electoral. Al día siguiente, Lukashenko fue a buscar apoyo en la fábrica de tractores de Minsk, donde fue abucheado por los trabajadores. Una huelga general se extiende por todo el país. En varios cruces con los manifestantes, algunos contingentes de la policía se pasaron a la multitud. La televisión pasa solamente programas musicales ante la deserción del personal. La candidata de la oposición eligió a Lituania para escapar a las amenazas que había recibido de parte de las fuerzas de seguridad, un país que tiene un gobierno pro-OTAN y furibundamente anti-ruso. El intento de Bielorrusia, muy dependiente de Moscú, de maniobrar entre la Unión Europea y Rusia, en los últimos años, ha terminado alienando a uno y otro. La promesa de Lukashenko de construir un real estado nacional, de los despojos de la ex URSS, ha sucumbido sin atenuantes. El vacío político que dejaría su partida obligaría a un entendimiento entre Rusia y la OTAN, en cualquier caso, precario, o llevaría a una guerra, al menos del tipo ya visto en Georgia y Ucrania.

La apelación de Lukashenko al socorro de Putin no ha dado un resultado favorable, pues el ruso sólo prometió auxiliarlo en caso de una invasión militar – algo que sólo podría ocurrir en una instancia extrema. El problema real, para Rusia y la OTAN, es que la huelga general se haga completa, y que por otro lado se quiebre el aparato de seguridad. En ese caso Putin recurriría a una intervención, incluso con el visto bueno de la Unión

Europea. Luego tendría que negociar el establecimiento de un gobierno que se comprometiera a mantener los acuerdos con Rusia e incluso una tutela política – algo que la crisis económica, la pandemia y el despertar popular convierten en una quimera.

Hasta donde es posible saber, las huelgas recogen los slogans políticos de la oposición pequeñoburguesa, incluidos algunos oligarcas, o sea que no están presentes las reivindicaciones sociales, ni se han formado bolsones de poder de la clase obrera, como consejos o coordinaciones. Es natural que esta limitación se fuera superando con el desarrollo de la crisis. La rebelión adquiriría una potencia propia, intolerable para el ‘este’ como para el ‘oeste’.

Para que los enormes deseos democráticos de la población encuentren una salida popular profunda, la caída del gobierno y la convocatoria de una Constituyente soberana son planteos muy adecuados que podrían emerger en cualquier momento. Ayudaría a desarrollar una diferenciación política entre los obreros, de un lado, con un planteo de reclamos sociales y el control obrero en oposición a las privatizaciones, y la parte superior de la clase media democrática, del otro, que sigue como a una sombra la demagogia la OTAN y la UE.

En Europa del este e incluso en Rusia no han faltado las movilizaciones y las luchas frente una realidad post soviética cada vez más penosa, que fueron manipuladas por las potencias en presencia. Un desarrollo diferente en Bielorrusia tendría un impacto enorme en todo ese espacio post soviético y en la misma Rusia.

Jorge Altamira

\*del sitio [politicaobrero.com](http://politicaobrero.com)

# GUERRA A LOS JUBILADOS

Entre los planes que el *Fondo Monetario Internacional* exige a los estados endeudados para alcanzar nuevos acuerdos el ataque a las jubilaciones pica en punta. Se exigen la elevación de la edad jubilatoria y el aumento de años de aporte. Ante el vaciamiento del ANSES se aspira a reemplazar los aportes jubilatorios por un subsidio a la vejez. Una IFE para jubilados que trabajaron toda su vida.

A los planes se le suma la realidad que nos da como resultado un cuarenta por ciento de trabajadores que nunca llegarán a jubilarse por falta de aportes o simplemente haber trabajado su vida entera en negro.

Por su parte, el último aumento jubilatorio ha sido de \$42 por día.

Las jornadas de diciembre de 2018 en defensa de los aportes jubilatorios continúan a la orden del día.

# LA REFORMA JUDICIAL

Escribe **Maxi Laplagne**

En medio de una pandemia sin precedentes en la historia mundial, la iniciativa más enérgica del gobierno nacional ha pasado por reformar la estructura burocrática de los fueros penales de la justicia y, aunque dispuesto a discutir los nombres, los métodos y las formas, a los integrantes del consejo de la magistratura. Con el transcurso de los días incluso los jueces que se suponían encabezar el proyecto le han bajado el pulgar. Sin el mínimo orgullo propio, ahora Massa anuncia que quedará para más adelante.

El proyecto del gobierno no implica ninguna reforma estructural de la justicia al punto de que, a diferencia de la pretendida reforma en el año 2013, ni se intentó hablar de una “democratización”. En aquel entonces la señora Fernández de Kirchner pretendía reformar el método de la porción minoritaria del consejo de la magistratura para, entre líneas, habilitar una ley que bloquee los juicios que el Estado debe pagar a los jubilados, por un lado, y las deudas de las aseguradoras de riesgos de trabajo con miles de trabajadores, por otro. El solo intento de aplicar la ley generó una huelga de setenta y dos horas de los trabajadores judiciales que cajoneó el proyecto para siempre.

Puede decirse que los alcances del actual proyecto son menos ambiciosos porque su objetivo último es reglamentar la impunidad de quienes gobernaron la Argentina en los últimos veinte años. El gobierno presenta un proyecto que pone a discusión cualquier posible reforma porque su objetivo es sellar junto a Mauricio Macri el fin de las causas por las que podrían terminar presos. Fin.

Se trata no sólo de un proyecto de carácter reaccionario sino también de una agenda reaccionaria. Ninguna modificación burocrática de la justicia como lo es el simple hecho de unificar fueros penales reforma la orientación política de la justicia cuya naturaleza está pensada por el Estado para funcionar de árbitro entre intereses capitalistas en pugna, pero, sobre todo, entre capitalistas y trabajadores. El objetivo principal del poder judicial es reemplazar la acción directa de los trabajadores y oprimidos en general por una burocracia

infinita dominada por la corrupción a dedo. Agregar o quitar fueros no devuelve la justicia a las miles de mujeres secuestradas por redes de trata a cuyos familiares el Estado envuelve en papeleos infinitos para ocultar a los responsables del poder.

La justicia es en sí misma un negocio inmenso de juicios que cotizan en la bolsa según su desarrollo. El supuesto poder eterno de las leyes se reemplaza por las leyes del mercado que imponen los métodos y los tiempos con lo que se abordan los juicios. Por supuesto que detrás del mercado blanco rige también la oscuridad de las coimas y las servilletas.

En estas condiciones, la elección popular de los jueces no modifica un ápice la naturaleza del poder judicial así como el sufragio universal del poder ejecutivo no se transforma en el poder del pueblo. Las elecciones continuarían siendo dominadas por los grandes pulpos capitalistas que dominan los medios de comunicación y difusión tergiversando la voluntad real de las masas.

Ahora bien, el sistema de creación y aplicación de leyes debe ser puesto en debate sin lugar a dudas. Mientras el actual sistema judicial se supone al servicio y en defensa de los intereses individuales de los ciudadanos supeditados al bien común, lo que sucede en realidad es la eliminación de los derechos individuales absorbidos por los intereses del capital. En cambio, un sistema en que el derecho parta de la deliberación colectiva haría coincidir los intereses individuales con los intereses colectivos haciendo que, paradójicamente, los primeros dejen de existir. El derecho se transforma de esta manera en un sistema universal de libertades en el que el individuo y la sociedad coinciden. Sólo una clase de carácter universal, entonces, puede desarrollar esta tarea. Sólo el proletariado puede constituir un sistema de leyes imparcial. Sólo un gobierno de trabajadores podría imponer la elección popular de sus representantes legales.

## APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO CASTRO

FUERA BERNI,  
EL ESTADO ES RESPONSABLE, EL GOBIERNO ENCUBRIDOR.

